

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
DESPACHO 11

Santiago de Cali, dieciséis (16) de febrero del dos mil veintiuno (2021).

Auto Interlocutorio No. 07

Radicación:	76-001-23-33-000-2021-00237-00
Acción:	Acción Popular
Demandante:	Oscar Ortiz y Otros Zanjoncarmelo7.3@gmail.com Asesoriasencontratacion2@gmail.com
Demandado:	<ul style="list-style-type: none">Gobernación del Valle del Cauca njudiciales@valledelcauca.gov.coCorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC Notificacionesjudiciales@cvc.gov.coMunicipio de Candelaria Buzon_notificaciones_judiciales@candelariavalle.gov.coEmpresas Publicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P EMCANDELARIA notificacionesjudiciales@emcandelaria.gov.coCandeaseo S.A. E.S.P contacto@candeaseo.gov.coGarcía Gómez Agroinversiones S.A. Granja Porcicola La Esmeralda. contabilidad@agroinversiones.comPollos Bucanero- Planta de Concentrados info@pollosbucaneros.comTafur Y CIA S EN C. Avicola_pinela@hotmail.comGrupo Pregio S.A.S ripapasas@gmail.com
Instancia:	Primera
Tema:	Auto admite demanda y decreta medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

Los señores Oscar Ortiz y otros, presentaron demanda contra EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P - EMCANDELARIA, el MUNICIPIO DE CANDELARIA, la Corporación Autónoma del Valle Cauca (CVC) y la Gobernación del Valle del Cauca -Secretaría del Medio Ambiente, con las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Ordenar que se declare que los accionados están vulnerando los derechos fundamentales de la niñez, la vida y la salud, los derechos colectivos a)Goce al ambiente sano; b) Diversidad y la integridad ambiental; c) El goce al ambiente sano; d)Saneamiento ambiental; e) Salubridad pública; f) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; g) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene proteger los derechos fundamentales y colectivos [precitados].

TERCERA: Que se declare la protección ambiental del río Fraile.

CUARTA: Ordenar la suspensión inmediata de las actividades antrópicas que genere cualquier tipo de vertimientos en el zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile [...].

QUINTA: Ordenar [a los accionados] adelanten de forma inmediata, las obras y actividades necesarias para evitar que las aguas negras y las aguas lluvias y todo tipo de vertimientos líquidos y sólidos sigan penetrando en las residencias de las personas que habitamos en los callejones El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo del Municipio de Candelaria.

SEXTA: Ordenar [a los accionados] realizar obras civiles en el canal natural abierto existente, que se construya un canal cerrado con cubrimiento total (entamborar), que genere una sección completa cerrada que mejore las condiciones de los tramos del zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile de los callejones El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo Municipio de Candelaria –Valle del Cauca, de los alrededores de las viviendas de los accionantes que impida la proliferación de los olores nauseabundos, ofensivos y la contaminación atmosférica de los predios cercanos a las personas que habitamos alrededor del zanjón y que estamos haciendo uso de la presente acción.

SÉPTIMA: Ordenar [a los accionados excepto la CVC] realizar la construcción del alcantarillado sanitario público contemplado en el plan Maestro de Alcantarillado.

OCTAVA: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, imponer a los accionados: GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. –GRANJA PORCICOLA LA ESMERALDA, POLLOS EL BUCANERO S.A. –PLANTA DE CONCENTRADOS, O TAFUR Z Y CIA S EN C, GRUPO PREGIO S.A.S, ETC, lo ordenado en el numeral 8 del artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 2015; “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.

NOVENA: Ordenar CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC imponer medidas de manejo ambiental adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales que agraven más el medio ambiente sobre el zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile, de acuerdo con el Decreto 1076 del 2015 -artículo 2.2.2.3.9.1.

DECIMA: Ordenar se integre un comité de verificación, el cual ampare los derechos fundamentales y garantice el cumplimiento de cada una de las pretensiones aprobadas.

DECIMA PRIMERA: Ordenar a la empresa CANDEASEO S.A. E.S.P realizar como lo ordena la Ley 1252 del 2008 la recolección de los residuos sólidos dispuestos en el callejón El Tunal y dispuestos en la subderivación 7.3 del río Fraile.

DECIMA SEGUNDA: Ordenar [a los accionados] y GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. –GRANJA PORCICOLA LA ESMERALDA, POLLOS EL BUCANERO S.A. – PLANTA DE CONCENTRADOS CAVASA, O TAFUR Z Y CIA S EN C, GRUPO PREGIO S.A.S., realizar campañas de educación ambiental a las comunidades de la subderivación 7.3 del río Fraile.

También pidieron prohibir a las empresas la contaminación de este zanjón y/o realizar cualquier tipo de vertimiento sin permiso, o sin ningún instrumento de manejo ambiental sobre el zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile, hasta tanto se dé una solución de fondo a la problemática expresada en la presente acción.

Finalmente, se solicitó amparo de pobreza.

II. CONSIDERACIONES

A. Jurisdicción y Competencia en acciones populares.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas como lo dispone el artículo 15 de la Ley 472 de 1998.

Conforme a la misma ley, en razón de la competencia territorial, conocerá la demanda el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular, según lo establece el artículo 16.

El artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 sin la modificación de la ley 2080 de 2021 que aún no entra en vigencia, en relación con la competencia funcional dispone:

Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las **autoridades del orden nacional** o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. (...)"

Bajo esas premisas normativas, teniendo en cuenta que la presente acción se invocó contra la autoridad nacional Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC y las autoridades locales Gobernación del Valle del Cauca, Municipio de Candelaria, Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P EMCANDELARIA, Candeaseo S.A. E.S.P, García Gómez Agroinversiones S.A. Granja Porcicola La Esmeralda, Pollos Bucanero- Planta de Concentrados, O Tafur Y CIA S EN C y Grupo Pregio S.A.S., se asumirá el conocimiento por fuero de atracción.

Lo anterior porque el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, prevé:

Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley."

A su turno, la Corte Constitucional, en la sentencia **T-948 del 2008**, precisó:

"(...) Con base en esa disposición, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha aclarado que el hecho de que las C.A.R.s estén integradas por entidades territoriales no significa que hagan parte de ellas o que tengan esa misma naturaleza, pues son entidades del orden nacional en razón a que las funciones que desempeñan corresponden al Estado en su nivel central"

(...)

También, refiriéndose a la naturaleza de las Corporaciones Autónomas Regionales, la sentencia C-578 de 1999 dijo que aquellas no se articulan al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas, por ende, a ningún ministerio o departamento administrativo, por lo que "no pueden ser considerados como células típicas de la organización descentralizada o por servicios, sino como entidades administrativas del orden nacional". En consecuencia, su naturaleza es sui generis porque, a pesar de que está conformada por entidades territoriales y desempeña funciones específicas y concretas dentro de una circunscripción territorial, es un organismo del orden nacional."(se subrayó).

B. Requisitos para la admisión.

La demanda cumple los requisitos previstos en los artículos 18 de la Ley 472 de 1998, 144 y 161, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011, actualmente vigente y aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.

Se advierte que el actor popular no envió a las entidades accionadas mediante correo electrónico escrito de la demanda y sus anexos tal como lo dispone el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 2080 del 2021 que reformó el CPACA, empero, por tratarse de una acción constitucional de impulso oficioso y para salvaguardar los principios de economía procesal y celeridad procesal, con la notificación de este auto se enviará adjunto el escrito de demanda y sus anexos.

C. Competencia, requisitos y decreto de medidas cautelares.

Respecto a la competencia para resolver la medida cautelar se hace constar que conforme al literal h) del artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, vigente a partir del 26 de enero de este año, el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar en primera instancia es de ponente.

De otra parte, en cuanto a las medidas cautelares en sí, se resalta que son un mecanismo procesal que tiene por finalidad brindar protección anticipada del derecho invocado por el actor cuando el juez encuentre que existe apariencia de buen derecho, esto es, que sus razones para demandar cuentan con bases sólidas en el marco normativo y fáctico del caso y el transcurso del juicio implique un detrimento de ese derecho que deba ser prevenido y conjurado para que el fallo estimatorio no sea ineficaz.

Sobre las medidas cautelares al interior de las acciones populares, el artículo 25 de Ley 472 de 1998, dispone:

“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:

- a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;
- b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;
- c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
- d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

PARAGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.

PARAGRAFO 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado.”

A su turno la Ley 1437 de 2011 en su artículo 229 contempla:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos ~~y en los procesos de tutela~~ del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.”

El Consejo de Estado¹ aclaró que *“ambas disposiciones deben ser interpretadas de manera armónica”*, máxime al encontrarse que *“la Ley 472 resulta ser más garantista que lo dispuesto en el Capítulo XI del CPACA”*.

También señaló que el decreto de una medida previa en un juicio de acción popular está sujeto a los siguientes presupuestos de procedencia²:

“a) Que esté debidamente demostrado en el proceso la inminencia de un daño a los derechos colectivos o que el mismo se haya producido, esto con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir aquel daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó;

- b) Que la decisión del juez al decretar la medida cautelar esté plenamente motivada;**
y
c) Que, para adoptar esa decisión, el juez tenga en cuenta los argumentos contenidos en la petición que eleve el demandante, para que se decrete tal medida, lo cual, lógicamente, no obsta para que el juez oficiosamente, con arreglo a los elementos de juicio que militen en la actuación, llegue al convencimiento de la necesidad de decretar una medida cautelar y proceda en tal sentido". (negrillas textos originales).

En el presente proceso, se invocó el amparo de los siguientes los siguientes derechos: i) de la niñez, ii) a la vida, iii) a la salud, iv) Diversidad y la integridad ambiental, v) el goce al ambiente sano, vi) el goce al ambiente sano, vii) saneamiento ambiental, viii) salubridad pública, ix) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, x) el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

Al respecto vale la pena precisar que en el ámbito de la acción popular no se debaten derechos fundamentales como la vida, la salud y la niñez. En ese entendido el análisis de vulneración en el marco de esta acción se limitará a los derechos colectivos: la protección del goce de un ambiente sano, goce del espacio público y utilización y defensa de bienes de uso público, salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

Ahora bien, los actores populares alegan que una población de veinte personas aproximadamente habita el callejón el Tunal y Águila Roja, ubicado en el corregimiento El Carmelo del Municipio de Candelaria - zanjón de la sub-derivación 7.3 del río Frayle, y se ven afectados por vertimientos y deposición de residuos sólidos y biológicos que hacen las viviendas y empresas del sector.

Dicen que en el mes de junio del 2020 elevaron diversas peticiones ante las secretarías municipales de gobierno, de salud pública y seguridad social, de infraestructura y valorización, de medio ambiente y desarrollo económico y la oficina de gestión de riesgo del Municipio Candelaria, con el fin de informar y denunciar la problemática de vertimientos y deposición de residuos sólidos y biológicos.

Al respecto se anexó:

1. Oficio por el cual la autoridad municipal informó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC sobre la situación denunciada. Así mismo, se verificó que la autoridad ambiental y administración municipal realizó visita técnica para verificar los hechos denunciados y comprobó la problemática.
2. La CVC, por su parte, mediante oficio de 16 de septiembre del 2020 identificó las posibles empresas y viviendas que están realizando los vertimientos sin permiso y los requirió sobre el uso de las fuentes de agua y el manejo de sus residuos líquidos al interior del establecimiento (páginas 34-37 anexo 3-4 SHAREPOINT).
3. Visita técnica realizada por administración realizada el 10 de septiembre del 2020.
4. Mediante oficio del 14 de septiembre del 2020 la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Candelaria, con fundamento en la visita, identificó cuatro problemáticas, frente a las cuales propuso un plan de acción, en los siguientes términos (página 18 anexo 3-4 del SHAREPOINT):
 1. Frente a la problemática de vertimientos de aguas residuales no tratadas. Preciso que la administración municipal está gestionando los recursos para realizar la implementación del Plan Maestro de alcantarillado del Carmelo y San Joaquín donde la mayor inversión sería la reposición del colector final que va sobre el callejón águila roja.
 2. Frente a la problemática de la disposición de residuos sólidos en el cauce del zanjón. Preciso que se puede mitigar colocando una barrera que dificulte el acceso al cauce desde el callejón.
 3. Frente a la problemática de sección hidráulica de la alcantarilla deficiente. La administración municipal se compromete a implementar un programa de remoción

constante de los residuos sólidos y sedimentos acumulados en la alcantarilla a su paso por el callejón El Tunal.

4. Frente a la problemática del mantenimiento inadecuado de la sub-derivación 7.3 del río Fraile. La Administración se compromete a realizar el mantenimiento a sección hidráulica en la longitud del canal desde el callejón Águila Roja hasta el zanjón Tortugas.

En el oficio se precisó que, ante la imposibilidad financiera de la administración municipal de implementar las obras del plan maestro de alcantarillado por su cuenta, propone como solución lo siguiente: i) implementar un programa de remoción constante de residuos sólidos y sedimentos acumulados en la alcantarilla a su paso por el callejón El Tunal, ii) iniciar proceso sancionatorio a quienes realicen a los vertimientos no tratados, competencia a cargo de la secretaria de medio ambiente, iii) construcción de una barrera que dificulte la disposición de residuos sólidos sobre el cauce y reparación del tramo de la alcantarilla afectada.

La secuencia fáctica expuesta brinda certeza suficiente de la existencia de una vulneración de los derechos e intereses colectivos.

En tales circunstancias se impone decretar la siguiente medida cautelar:

1. Ordenar al **Municipio de Candelaria** que en término perentorio de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, implemente el programa de remoción periódica de residuos sólidos y sedimentos acumulados en la alcantarilla a su paso por el callejón y mantenimiento de la sección hidráulica en la longitud del canal desde el callejón Águila Roja hasta el zanjón Tortugas. Vencido el término deberá remitir copia de los actos administrativos, cronogramas y/o cdp, contratos, actas de inicio o avance que emita para el efecto.
2. Ordenar a la **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC**, que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, inicie las actuaciones de su competencia respecto de la vigilancia y control sobre los presuntos vertimientos sin permiso que se realizan en el zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile, zanjón El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo del Municipio de Candelaria. Vencido el término deberá remitir copia de los actos administrativos que para el efecto emita.

Se advertirá al municipio y la CVC que el incumplimiento de lo dispuesto dará lugar a imponer sanciones conforme a lo dispuesto en el artículo 241 del CPACA modificado por el artículo 60 de la Ley 2080 de 2021.

D. Amparo de Pobreza

La **Ley 472 de 1998** establece el amparo de pobreza en los siguientes términos:

ARTICULO 19. AMPARO DE POBREZA. El juez podrá conceder el amparo de pobreza cuando fuere pertinente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, o cuando el Defensor del Pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente.

PARAGRAFO. El costo de los peritazgos, en los casos de amparo de pobreza, correrá a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a partir de su creación. Estos costos se reembolsarán al Fondo por el demandado, en el momento de satisfacer la liquidación de costas, siempre y cuando fuere condenado.

A su turno, el **Código General del Proceso**, aplicable por remisión tácita de la ley 472 de 1998, dispone:

ARTÍCULO 151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.

ARTÍCULO 152. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado. (...)

ARTÍCULO 153. TRÁMITE. Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda.

En la providencia en que se deniegue el amparo se impondrá al solicitante multa de un salario mínimo mensual (1 smlmv).

La solicitud de amparo fue presentada oportunamente, como quiera que fue formulada con la presentación de la demanda.

Los actores manifestaron condición de pobreza.

En consecuencia, toda vez que se cumplen las condiciones para conceder el amparo de pobreza, el Despacho accede a lo solicitado por las accionadas.

E. Agotamiento de jurisdicción.

Se ordenará a la Relatoría del Tribunal establecer si existe o existió otro proceso con el mismo objeto para determinar el agotamiento de jurisdicción.

F. Utilización de medios electrónicos en las actuaciones judiciales

Con la **Ley 2080 del 2021** vigente a partir del 26 de enero de este año, se reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

1- El canal oficial de comunicación e información del despacho será el correo electrónico institucional del rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co. De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma LIFE SIZE. Con la notificación por correo electrónico de este auto se enviará el vínculo para acceder al expediente digital, tal como lo dispone el artículo 46 de la ley 2080 que modificó el artículo 186 CPACA.

2- Si bien el artículo 35.8 de la Ley 2080 del 2021 ordena enviar simultáneamente la demanda y sus anexos a los demandados, y ese deber no fue satisfecho por el actor. Empero, por tratarse de una acción constitucional, de impulso oficioso, y para salvaguardar los principios de economía procesal y celeridad procesal, al mensaje de datos de notificación personal se adjuntarán esos documentos digitales.

3- La notificación del presente auto admisorio se realizará conforme al artículo 48 de la ley 2080 del 2021 y tomando en cuenta que se apuntó el canal digital de las entidades públicas y empresas privadas demandadas.

4-. Mientras se integra el expediente digital de que trata el artículo 11 de la ley 2080 en SAMAI, se llevará en la aplicación en SharePoint y se permitirá a las partes su consulta.

5-. Conforme al artículo 52 de la Ley 2080, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes del envío del mensaje, y al día siguiente empezarán a correr los términos establecidos.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos por Oscar Ortiz y otros contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, el Departamento del Valle del Cauca, el Municipio de Candelaria, las Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P EMCANDELARIA, Candeaseo S.A. E.S.P, los particulares García Gómez Agroinversiones S.A., Granja Porcicola La Esmeralda, Pollos Bucanero- Planta de Concentrados, o Tafur Y CIA S EN C, y Grupo Pregio S.A.S.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a los accionados, en la forma dispuesta en el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, para lo cual se enviará mensaje de datos a su correo de notificaciones personales dispuesto como canal digital de comunicación, con el vínculo para acceder al expediente digital, **y se adjuntará este auto, el escrito de la demanda y sus anexos.**

TERCERO: OTORGAR a los demandados el término de diez (10) días para que contesten y soliciten las pruebas que consideren pertinentes, según lo dispone el artículo 22 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente al Ministerio Público a través de su canal digital la existencia de la presente demanda, para que intervenga si lo considera conveniente, como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos. Se indicará el vínculo para acceder al expediente digital, **y se adjuntará este auto, el escrito de la demanda y sus anexos.**

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, con el fin de informar a la comunidad sobre la admisión de la demanda por secretaria – Técnico en sistemas, se insertará la presente providencia en la página web de la Rama y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Igualmente, se ordenará al alcalde del Municipio de Candelaria – Valle, al Gobernador del Valle y al director de la CVC inserten la presente providencia en su página web.

SEXTO: REMITIR a través del canal digital de la Defensoría del Pueblo copia de la demanda y del auto admisorio según lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, para lo cual se enviará el vínculo para acceder al expediente digitalizado en SharePoint.

SEPTIMO: Para los efectos del artículo 46 de la Ley 2080 del 2021 el canal oficial de comunicación será el correo electrónico institucional rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co. El expediente digital reposará en SAMAI. Con la notificación por correo electrónico de este auto se enviará el vínculo para acceder al expediente digital.

OCTAVO: Ordenar al **Municipio de Candelaria** que en término perentorio de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, implemente el programa de remoción periódica de residuos sólidos y sedimentos acumulados en la alcantarilla a su paso por el callejón y mantenimiento de la sección hidráulica en la longitud del canal desde el callejón Águila Roja hasta el zanjón Tortugas. Vencido el término deberá remitir copia de los actos administrativos, cronogramas y/o cdp, contratos, actas de inicio o avance que emita para el efecto.

NOVENO: Ordenar a la **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC**, que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, inicie las actuaciones de su competencia respecto de la vigilancia y control sobre los presuntos vertimientos sin permiso que se realizan en el zanjón de la sub-derivación 7.3 del río fraile, zanjón El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo del Municipio de Candelaria. Vencido el término deberá remitir copia de los actos administrativos que para el efecto emita.

DÉCIMO: ADVERTIR que en el evento que se haga caso omiso a la medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del CPACA, se

impondrá multas hasta por cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv).

UNDECIMO: ORDENAR a la Relatoría de esta Corporación que en un plazo de cinco (5) días informe si algún Despacho adelanta o adelantó acción popular por la vulneración de los derechos colectivos a la protección y goce de un ambiente sano, goce del espacio público y utilización y defensa de bienes de uso público, salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los habitantes del callejón el Tunal y Águila Roja, ubicado en el corregimiento El Carmelo del Municipio de Candelaria - zanjón de la sub-derivación 7.3 del río Frayle, como consecuencia de los vertimientos y deposición de residuos sólidos y biológicos que hacen las viviendas y empresas del sector, en los cuales el extremo demandado haya estado integrado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC y el Municipio de Candelaria. **Lo anterior para efectos de determinar el agotamiento de jurisdicción o extender los efectos de este juicio a otro u otros que tengan similar o idéntico objeto** En caso afirmativo se suministrará al Despacho radicación de los procesos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada